

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO PROMISCOO DE FAMILIA
PALMIRA VALLE**

SENTENCIA Nº. 083

Palmira Valle, Agosto Dieciocho (18) de dos mil Veintidós (2022).

REF: LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL.
PARTES: BRAYAN OVIDIO ALVAREZ VALLEJO Y LUISA
FERNANDA OSORIO VASQUEZ
RAD: 76-520-31-10-002-2022-00042-00

I.- RAZON DE ESTE PRONUNCIAMIENTO.

Surtido el trámite de ley, y no existiendo incidentes, trámites ni cuestiones accesorias pendientes de resolver, procede el juzgado a proferir el fallo que en derecho corresponda, según los siguientes:

II.- ANTECEDENTES.

Mediante escrito presentado en el Juzgado el Veintinueve (29) de enero de 2022, a través de apoderado judicial, los señores BRAYAN OVIDIO ALVAREZ VALLEJO y LUISA FERNANDA OSORIO VASQUEZ, formulan petición de liquidación de la sociedad conyugal disuelta por causa de la Cesación de Efectos Civiles del Matrimonio Católico.

III.- LA DEMANDA.

A.- El petitum.

Las partes a través de gestor judicial eleva las siguientes compendiadas pretensiones:

PRIMERO: Aperturar el tramite liquidatorio de la Sociedad Conyugal que existe entre los señores Brayan Ovidio Álvarez Vallejo y Luisa Fernanda Osorio Vásquez

B.- Formalidades del libelo.

Además de las pretensiones y de los fundamentos de hecho que se desprenden de la petición elevada, se determina el documento como medio de prueba a hacer valer, se invocaron las disposiciones de derecho aplicables al asunto.

IV.- TRÁMITE PROCESAL.

El trámite Liquidatario se admitió mediante auto del Cuatro de (04) de febrero de 2022, ordenándose el emplazamiento a los acreedores de la sociedad conyugal.

Una vez vencido el término del emplazamiento, se fijó fecha para diligencia de inventarios y avalúos.

V. PRUEBAS.

A la demanda se acompañó registro civil de matrimonio, con la inscripción del divorcio decretado mediante sentencia No. 119 del 6 de diciembre de 2021, Estado de Cuenta de Crédito de Vivienda, Recibo de Impuesto Predial Certificado de Tradición del Bien Inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No.378 193186

VI.- CONSIDERACIONES DEL JUZGADO.

a.- Validez del proceso.

No se advierten vicios o irregularidades que invaliden parcial o totalmente la actuación y deban ser declaradas de oficio o puestas en conocimiento de las partes.

b.- Presupuestos procesales.

Se cumplen en este evento. El trámite se adelantó ante juez competente, la solicitud se formuló con el lleno de los requisitos legales pues en ella se consignaron, debidamente clasificados, sus elementos fundamentales, como partes, hechos, pretensiones, petición de pruebas, etc. y se acompañó de los anexos de rigor; las partes en su condición de personas naturales, mayores de edad, no discapacitadas mentales, actuando legalmente a través de apoderado judicial, comparecieron en debida forma al trámite.

c.- Interés jurídico y legitimación en la causa.

Entre las condiciones de la acción entendidas como aquellos requisitos que apuntan a la prosperidad, al éxito de las pretensiones de la demanda se encuentran, entre otras, el interés jurídico para obrar y la legitimación en la causa, entendida la última como la cualidad en el demandante de ser el titular del derecho subjetivo que invoca y en el

demandado la calidad de obligado a ejecutar la obligación correlativa. Por lo mismo, la ausencia de uno de ellos no impide al juez fallar sobre el fondo del asunto, sino que, necesariamente, entraña fallo absolutorio para el demandado.

En la especie que se examina, no tratándose de proceso de conocimiento sino de un trámite de liquidación donde no existe propiamente parte demandada, el interés jurídico para obrar procederá del vínculo existente entre la sociedad conyugal disuelta y las personas (ex cónyuges) llamadas a recogerla a tiempo que la legitimación social en la causa se identificará con el derecho de aquellas a reclamar la intervención del Estado a través de su jurisdicción, para que por medio de sentencia de mérito se aprueben sus pretensiones sobre el patrimonio social. Tal y como sucede con los solicitantes de la liquidación, quienes en tal condición han demostrado que les asiste interés jurídico y legitimación en la causa para pretender la liquidación y adjudicación de bienes y deudas de la sociedad conyugal, a efecto de adquirir legalmente la tradición de lo que por concepto de sus gananciales le pueda corresponder en la masa social.

d.- Naturaleza jurídica de la pretensión.

A voces del artículo 1774 del Código Civil, si antes de perfeccionarse el matrimonio los consortes no pactan por escrito capitulaciones matrimoniales, entendidas las mismas como aquellas convenciones relativas a los bienes que aportan a él y a las donaciones y concesiones que uno de ellos quiera hacer al otro, por el solo ministerio de la ley los esposos quedan sometidos al régimen de sociedad conyugal que regulan los capítulos 2º y siguientes del Título XII del Libro 4º del Código Civil con las modificaciones introducidas por la Ley 28 de 1932.

De igual manera, según el artículo 1820 modificado por la Ley 1ª de 1976, artículo 25, la sociedad conyugal así conformada se disuelve, entre otras causas, “1. *Por la disolución del matrimonio*”, y a su vez el artículo 152 ibidem, subrogado además por la Ley 25 de 1992, artículo 5º, estipula que el matrimonio civil (pero también el religioso) se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges y también por divorcio (o la cesación de los efectos civiles en el segundo) judicialmente decretado.

En ambos casos el efecto inmediato de la disolución del vínculo matrimonial lo constituye la disolución, el fin de la sociedad conyugal; sin embargo, su liquidación discurrirá por sendas distintas en uno y otro caso.

En efecto, en el caso de disolución por causa de muerte de uno o de ambos cónyuges la liquidación de la sociedad conyugal correrá pareja y simultáneamente con la liquidación de la herencia del cónyuge fallecido, al tiempo que en el caso de disolución por causa de

divorcio de matrimonio civil o nulidad y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso la misma se enrumbará por los cauces del artículo 523 del Código General del Proceso a partir del 01 de enero de 2016, fecha en que empezó a regir el C.G.P, en este distrito judicial-

En uno y en otro caso para que tanto los bienes como las obligaciones económicas de la sociedad conyugal se trasmitan efectivamente a sus socios, y en su caso a sus herederos, quienes vienen a ser su prolongación con todas las connotaciones de orden jurídico que ello representa, en principio sobre la universalidad social mas no sobre bienes u obligaciones determinados de la masa común, a no ser que se trate de bienes o deudas propias de los cónyuges, el trabajo de liquidación y partición de la sociedad conyugal surge como expediente legal, como título traslativo para individualizar o singularizar tales cuotas o acciones sociales y perfeccionar el modo de adquisición del dominio de los bienes asignados o adjudicados a cada ex-consorte. De no ser así los socios no podrán pretender ser propietarios de dichos bienes en la medida en que la propiedad entraña o presupone cosa corporal (artículo 669 del Código Civil) a tiempo que la universalidad social no pasa de ser un mero ente jurídico intangible por los sentidos.

En síntesis, la liquidación y adjudicación de la sociedad conyugal como universalidad jurídica es institución necesaria por cuyo conducto opera la traslación automática de su patrimonio, acciones y obligaciones constituidas durante el matrimonio a los excónyuges y/o herederos, evitando con ella que perduren derechos sin titular y que los efectos patrimoniales sociales se dispersen, deterioren y aún desaparezcan.

Tal y como ocurre en el sub-exámene, donde las partes erigieron su pretensión de liquidación de su sociedad conyugal disuelta bajo el supuesto de poseer vocación patrimonial ha acreditado probatoriamente la constitución del supuesto de hecho que sustenta tal pedimento (*"onus probandi incumbit actori"*).

e. Régimen de Gananciales.

Regido por el derecho común (Código Civil) se caracteriza por operar respecto de los bienes exclusivamente sociales, los cuales, una vez disuelta la sociedad conyugal y previa las deducciones de ley, y sin perjuicio del pasivo social, se dividen en dos partes iguales, una por cada cónyuge.

De allí que en el evento de que sólo algunos de los bienes de los cónyuges tengan la calidad de bienes gananciales será necesario, antes de liquidar la sociedad conyugal, precisar qué bienes son de propiedad exclusiva de los ex cónyuges, valga decir, adquiridos por uno o por ambos antes del matrimonio, o que habiéndolo sido durante la vigencia de

la sociedad lo hayan sido a título gratuito (donación, herencia o legado) y cuáles son sociales, adquiridos por los cónyuges a título oneroso.

Lo anterior en consonancia con las modificaciones introducidas al régimen económico del matrimonio por la Ley 28 de 1932, la cual reconoció a la mujer casada su plena capacidad y le otorgó la facultad de administrar y disponer libremente de los bienes que le pertenezcan al momento de contraer matrimonio, que hubiera aportado a él o los que hubiera adquirido o adquiriera durante el matrimonio.

f.- Inventarios y avalúos.

El inventario y los avalúos, actuación procesal eminentemente enunciativa, conforme a las regulaciones del derecho sucesoral (Ley 28 de 1932, artículo 4º, Ley 63 de 1936, artículo 34 y artículo 501 del Código General del Proceso), aplicable al caso por expresa remisión del artículo 1821 del Código Civil, tienen por finalidad la integración de la masa sucesoral y la sociedad conyugal, en su caso, de forma global y singular, o como dicen otros, están encaminados a reflejar la realidad contable del patrimonio social en el momento de la disolución de la sociedad y a mostrar su contenido pecuniario.

Por lo visto tal diligenciamiento no posee la virtualidad jurídica de conferir ni negar el dominio de los bienes allí enlistados, y su importancia quedará circunscrita al interior de la actuación. Tal y como lo ha reconocido el propio legislador (artículo 475 del Código Civil) al expresar: *“La mera aserción que se haga en el inventario de pertenecer a determinadas personas los objetos que se enumeran, no hace prueba en cuanto al verdadero dominio de ellos”*.

De allí que sea perfectamente posible y legal someterlo a controversia mediante su oportuna impugnación dentro y aún fuera del proceso de sucesión; en el primer caso como mecanismo dirigido a depurar, sanear y concretar la masa social conyugal y/o sucesoral y, a la vez, conferir certeza y seguridad a las resultas del trámite o proceso mediante la inclusión o exclusión de aquel de partidas deliberada o involuntariamente omitidas, o manifiestamente impertinentes e improcedentes. Es la finalidad de la preceptiva establecida en el artículo 501 del C.G.P. Mecanismo depurador del cual puede hacer uso todo aquel que, acreditando interés jurídico actual para obrar, se encuentre legitimado en la causa para deprecarlo, llámese interesado, parte o tercero. Así, por ejemplo, en el trámite de liquidación de la sociedad conyugal por causa de sentencia de juez de familia o eclesiástico podrá hacerlo cualquiera de los cónyuges. En el caso que se examina, la diligencia de inventarios y avalúos no fue objeto de controversia habida cuenta que las partes actúan de común acuerdo.

g. La partición.

En el entendido de que la sociedad conyugal como universalidad jurídica (artículos 1774 y 1781) indivisa debe terminar algún día sea mediante su distribución a los cónyuges y/o herederos y cónyuge sobreviviente, la partición y asignación del acervo social, depurado y concreto surge como institución (acción) jurídica eficaz establecida con tal propósito en favor de los interesados; única manera que tienen los cónyuges y/o herederos para disponer a su arbitrio de su cuota social o herencial singularizada sin perjuicio de que en conjunto con los demás coasignatarios pueda disponer antes, total o parcialmente, de la masa común.

Ahora bien, como se dijo líneas arriba, la partición y adjudicación en firme de la sociedad conyugal supone un activo o patrimonio social depurado, saneado y concreto a efecto de conferirle certeza y seguridad a las resultas del proceso, sea mediante el incidente de la objeción (artículo 509 del Código General del Proceso), por causas expresas y taxativas, al trabajo de su confección, para su corrección, por cualquier hecho o circunstancia que en cada caso en particular constituya ataque evidente a la legalidad y a la igualdad, equilibrio y ecuanimidad que de todas maneras debe observarse en su elaboración, y, por contera, entrañe ataque directo a los derechos e intereses sociales y hereditarios de los coasignatarios reconocidos, o bien mediante la suspensión de la partición (artículos 1387 y 1388 del Código Civil en concordancia con el artículo 516 del Código General del Proceso) cuando quiera que exista confusión de bienes de la sociedad con la herencia o con los de un coheredero o un tercero que la afecte de manera considerable.

Por otra parte el trabajo de partición, a través de la adjudicación de bienes que en ella se les haga, también opera como mecanismo legal para satisfacer sus créditos a los posibles acreedores societarios y hereditarios si bien con prestaciones distintas pero al fin y al cabo económicamente valorables y supuestamente equivalentes, que se materializan con la disposición de bienes pertenecientes a la comunidad o sucesión (dación en pago), así no sea como expresión directa y concordante de voluntad del tradente y el adquirente sino como el resultado de las operaciones y cálculos al interior del trabajo de partición.

De conformidad con lo indicado en la audiencia de inventarios y avalúos celebrada el día 13 de Julio hogaño, el gestor judicial de las partes presento de Mutuo Acuerdo los inventarios y avalúos de los bienes y deudas de la sociedad conyugal ALVAREZ-OSORIO, el que fue aprobado por esta instancia y quedo de la siguiente manera: **ACTIVO SOCIAL: PARTIDA UNICA:** Bien inmueble ubicado en la Carrera 27 N° 4-114, de la Etapa II de la Urbanización Cerezos de la Italia de este Municipio, identificado con Matricula Inmobiliaria 378- 193186, adquirido mediante escritura pública N° 1589 del día 09 de junio del año 2.015, corrida en la Notaria Segunda de este Circulo según anotación No. 04 del

23 de Julio de 2015. Bien inmueble que se avalúa en la suma en la suma de Ciento Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Tres mil Pesos (\$104.253. 000.oo), **VALOR TOTAL DEL ACTIVO. Ciento Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Tres mil Pesos (\$104.253. 000.oo)**, **PASIVO:** El pasivo social lo constituye **Hipoteca abierta sin límite de cuantía**, constituida sobre el bien inmueble anteriormente descrito con matrícula inmobiliaria No. 378193186. A favor del Banco Caja Social, según anotación No 07 del 23 de Julio del año 2015, este pasivo tiene una cuantía a corte del 31 de enero del año 2022, en la suma **de Treinta Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos con Veintiún centavos (\$30.999.298.21)**. Así mismo se decretó la partición de los bienes denunciados en la audiencia de inventario y avalúos y como quiera que el apoderado judicial estaba facultado para realizar el trabajo de partición, se le reconoció tal calidad y se le concedió el termino de diez (10) días para que realizara el respectivo trabajo, advirtiéndose que una vez recibido el mismo se procedería tal y como lo dispone el art 509 del C.G.P. Dentro del término indicado el partidor designado presento el trabajo de partición y por estar ajustado a derecho habrá de aprobarse.

VII. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, **el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira - Valle, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,**

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR en todas sus partes el trabajo de partición presentado por el apoderado de las partes de los bienes y deudas de la sociedad conyugal, conformada por el hecho del Matrimonio Católico celebrado entre los señores BRAYAN OVIDIO ALVAREZ OSORIO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.113.646.482 y LUISA FERNANDA OSORIO VASQUEZ Identificada con cedula de ciudadanía No. 1.113.653.715, cuya disolución y estado de liquidación se decretó por Sentencia No. 119 de 06 de diciembre de 2021, proferida por este despacho Judicial.

SEGUNDO: INSCRIBIR la presente providencia en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio de los citados excónyuges, inscrito en el Indicativo Serial No.6384955 de la Notaria Segunda de este círculo notarial y en el de nacimiento de cada uno de ellos. (núm. 6 art. 27 de la ley 1.976 y art. 72 decreto 1260 de 1.970).

TERCERO: ORDENAR la inscripción de la sentencia con el respectivo trabajo de partición en los folios de matrícula inmobiliaria correspondiente. Líbrese oficio.

CUARTO: POR secretaría y a costa de la parte interesada expídase las copias necesarias para los fines pertinentes.

QUINTO: EN firme esta sentencia y cumplidos los ordenamientos anteriores, archivar el expediente

NOTIFÍQUESE.

La Juez,

MARITZA OSORIO PEDROZA.

**JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE
FAMILIA DE PALMIRA**

En estado No. 128 hoy notifico a las partes el auto que antecede (Art.295 del C.G.P.).

Palmira Valle, 19 de Agosto de 2022

La Secretaria

NELSY LLANTEN SALAZAR

Firmado Por:

Maritza Osorio Pedroza

Juez

Juzgado De Circuito

Promiscuo 002 De Familia

Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0264fd7223548f0c230f9085a174600e411889ecf776052c191db9cbb7f0419**

Documento generado en 18/08/2022 09:51:58 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>